



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

**Fecha:** 29 de septiembre de 2021

**Asunto:** Verbal N° 2017-00303-00.  
Sentencia Primera Instancia

De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 373 del C.G.P. y lo anunciado en audiencia de fecha 03 de septiembre de 2021, se procederá a emitir sentencia escrita en el presente asunto.

**1. Síntesis de la demanda y las contestaciones:** Art. 280 Inc. 3 C.G.P.

**1.1.- Demanda:**

**ADRIANA BETANCUR OCHOA, ÓSCAR DAVID BETANCUR OCHOA, ISABELLA MEJÍA BETANCUR, GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR, MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN, LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN<sup>1</sup> y GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA,** presentaron demanda de responsabilidad civil extracontractual originada en el accidente de tránsito sufrido el 12 de diciembre de 2011 en la vía Cali-Popayán entre los vehículos identificados con placas VBU-705 (asignado por velotax) y el camión SVE-809, propiedad del señor PABLO ORBES, rodante que se encontraba afiliado a la empresa de TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S.

La mencionada colisión produjo como resultado el fallecimiento del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y de otro lado graves lesiones a la señora BELISA OCHOA MORENO. Aunque en este acontecimiento, estuvo involucrado un tercer vehículo tipo Bus identificado con placas SLF-260, debe memorarse que contra el propietario de dicho vehículo no se dirigió el presente pleito.

Así las cosas, la demanda se dirige entonces contra: a) **COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA**, b) **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO**, c) **EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S**, d) **PABLO ORBES** y e) llamado en garantía **EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO** por parte de **COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA**

Identificación de vehículos involucrados:

---

<sup>1</sup> Es representada legalmente por su madre PIEDAD CECILIA SANJUÁN LEAL (fl 17 Cdo.1)

**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co



Vehículo No. 1.



Vehículo No.2



Vehículo No. 3.<sup>2</sup>

En este asunto, se persiguen como pretensiones el pago de perjuicios así:

1.
- Daño patrimonial \$2’617.400.oo.
2.
- Daño moral e intereses moratorios (muerte de FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA)

Persona	Parentesco	valor
ADRIANA BETANCOURT OCHOA	Hija	100 SMMLV
ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA	Hijo	100 SMMLV
ISABELLA MEJÍA BETANCUR	Nieta	50 SMMLV
GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR	Nieto	50 SMMLV
MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	50 SMMLV
LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	50 SMMLV
GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA	verno	25 SMMLV

Daño moral e intereses moratorios (lesiones sufridas por BELISA OCHOA MÓREO)

Persona	Parentesco	valor
ADRIANA BETANCOURT OCHOA	Hija	75 SMMLV
ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA	Hijo	75 SMMLV
ISABELLA MEJÍA BETANCUR	Nieta	40 SMMLV
GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR	Nieto	40 SMMLV
MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	40 SMMLV
LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	40 SMMLV
GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA	verno	15 SMMLV

3.
- Costas y agencias en derecho.

**1.2.- Contestaciones:**

a) **COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA**, propuso los siguientes medios defensivos: *i)* prescripción de la acción del contrato de transporte, *ii)* ausencia

<sup>2</sup> Imágenes tomadas del Informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito NO. 120205896

**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

de responsabilidad en el hecho que originó la acción, *iii*) falta de legitimidad en la causa por activa en el orden de la relación de perjuicios morales, *iv*) inexistencia de la obligación a cargo de la demandada por inexistencia de causa invocada, *v*) excepción genérica.

**b) EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S**, propuso los siguientes medios defensivos: *i*) falta de legitimación en la causa por pasiva, *ii*) cobro de lo no debido, *iii*) inexistencia de relación contractual con los demandados y ruptura del nexo que ligó a transoriente, *iv*) comportamiento inapropiado del propietario, *v*) responsabilidad única y exclusiva de persona determinada, *vi*) inepta demanda, *vii*) innominada.

**c) LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO (como demandada directa)**, formuló los siguientes medios defensivos: *i*) régimen de responsabilidad aplicable en desarrollo de actividades peligrosas, *ii*) concurrencia de culpas, *iii*), inaplicación de la presunción por responsabilidad en desarrollo de actividades peligrosas, *iv*) graduación de la culpa por causalidad conjunta de los agentes generadores del daño, con base en su grado de contribución, *v*) diligencia y cuidado, *vi*) ausencia de responsabilidad por ruptura del nexo causal -causa extraña-hecho de un tercero-, *vii*) tasación excesiva de los eventuales perjuicios, *viii*) sujeción al contrato de seguro celebrado, *ix*) prescripción derivada del contrato de seguro, *x*) límite de valor asegurado, *xi*) disponibilidad del valor asegurado, *xii*) ausencia de solidaridad del contrato de seguro celebrado con la equidad seguros generales, *xiii*) genérica

**d) LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO (como llamada en garantía fls 53 a 79 Cdo.3)**, planteó los siguientes medios defensivos: *i*) oposición a la vinculación y afectación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual AA002341 orden 186 emitida por la agencia Ibagué mediante el certificado AA021219 por exclusión expresa 2.1., *ii*) ausencia de obligación solidaria de la equidad seguros generales OC, *iii*) concurrencias de culpas, *iv*) inaplicación de la presunción por responsabilidad en desarrollo de actividades peligrosas: colisión de actividades, *v*) graduación de culpa por causalidad conjunta de los agentes generadores de daño, con base en su grado de contribución, *vi*) sujeción al contrato de seguro AA002342 orden, seguro de responsabilidad civil contractual, emitido por la agencia Ibagué mediante el certificado AA021219, *vii*) límite de valor asegurado, *viii*) disponibilidad del valor asegurado, *ix*) excepción genérica o innominada.

**e) Curador Ad-litem de PABLO ORBES**, expuso los siguientes medios defensivos: *i*) ausencia de responsabilidad civil extracontractual, *ii*) hechos de un tercero, *iii*) fuerza mayor, *iv*) innominada.

**2.- Calificación de la conducta procesal de las partes:** Art. 280 Inc. 1 C.G.P.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Revisadas las cargas y conductas procesales de las partes se evidencia que el demandado PABLO ORBES, fue representado por curador *Ad-Litem* que carece de poder dispositivo y no se dan los efectos de confesión.

No compareció a la audiencia de que trata el artículo 372 del C.G.P., el representante legal de EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S, persona a la que le fue impuesta multa de cinco salarios mínimos legales vigentes.

**3.- Consideraciones probatorias y jurídicas:** Art. 280 Inc. 1 C.G.P.

**3.1.- Verificación de competencia temporal del artículo 121 del C.G.P.**

Señala el artículo 121 del C.G.P. que:

*Art. 121.- **Duración del proceso.** Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación de auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.*

*(...)*

*Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso”.*

- a) **Contabilización del término:** Acorde el acta de reparto el proceso fue asignado en junio 13 de 2017.
- b) En sentencia C-443 de 2019 se declaró inexecutable la expresión nula de pleno derecho.
- c) **Conclusión:** No se evidencia causal alguna de nulidad que vicie lo actuado se modo que cualquier hecho que configure nulidad saneable se tendrá por saneado conforme a lo señalado en el artículo 136 del C.G.P.; en particular con lo reglado en el artículo 121 del C.G.P.

**3.2.- Problema jurídico:** Art. 30 Acuerdo PSAA16 – 10618.

**¿Se encuentran presentes los supuestos jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividad peligrosa en cabeza de los demandados COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, EMPRESA DE TRANSPORTE**

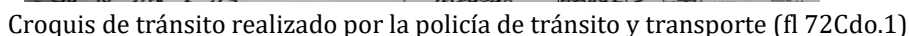
Carrera 10 No 14 - 15 piso 15 - Telefax: 282 0030 - Bogotá - Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Establece el Código Civil en su artículo 2341 que quien cause un daño a otro está obligado a repararlo, estableciendo dos diferentes tipos de regímenes para tal efecto, el de culpa probada y el de culpa presunta, este último aplicable al ejercicio de las actividades peligrosas establecido en el artículo 2356 de la mencionada codificación, dentro de las cuales la jurisprudencia patria es pacífica en identificar la conducción de automotores.

En consecuencia, se proceden verificar los elementos de hecho, daño y nexo causal conforme al acervo probatorio ofrecido por la parte demandante.

En cuanto al hecho dañoso se propone la colisión que surgió entre el automóvil identificado con placas VBU-705, afiliado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, el cual transportaba al señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y a la señora BELISA OCHOA MORENO como pasajeros, con el camión identificado con placas SVE-809, propiedad del señor PABLO ORBES y afiliado a la empresa de TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S, el día 12 de diciembre de 2011 en la vía que conduce de Cali a Popayán, en el Km 3 +800 Mts.

El **informe de las autoridades policivas** da cuenta que los vehículos mencionados estuvieron presentes en la fecha y sitios ya referidos, aproximadamente a las 08:35 p.m (fl 71 Cdo1, Tomo I) siendo relacionado el automóvil identificado con placas VBU-705 como vehículo número 1º mientras que el camión identificado con placas SVE-809 como número 2º y graficándose su ubicación final (fl 72 Cdo1, Tomo I). La disposición final de los vehículos fue:







**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

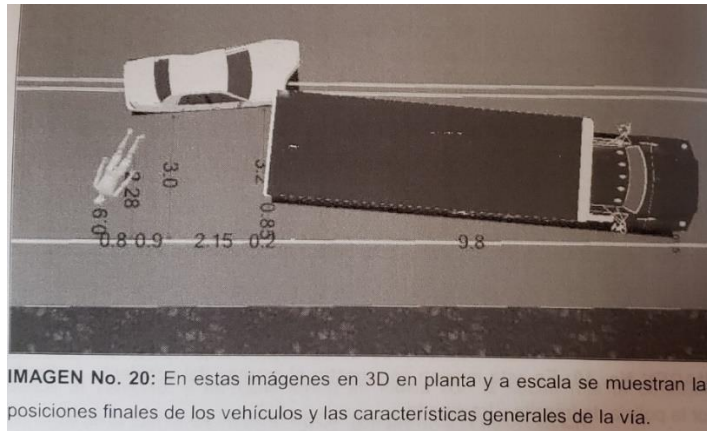


IMAGEN No. 20: En estas imágenes en 3D en planta y a escala se muestran las posiciones finales de los vehículos y las características generales de la vía.

Recreación del accidente de tránsito. Informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito No. 120205896 (fl 579 y ss Cdo.1, Tomo II)

**Contradicción:** Ningún reparo formuló la parte pasiva del litigio, previo el cumplimiento de aportación oportuna y publicidad de los medios de prueba.

**Conclusión:** Así las cosas, en cuanto a la existencia del hecho dañino y cumpliendo con las exigencias de los artículos 164 y 176 del C.G.P., las pruebas cuentan que el proceder acusado consiste en el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de vehículos automotores de carácter extracontractual, al choque entre los vehículos de placas VBU-705 y el camión identificado con placas SVE-809 el día 12 de diciembre de 2011 en la vía que conduce de Cali a Popayán, en el Km 3 +800 Mts. En donde, los dos transitaban en la vía y en el mismo sentido del carril de Cali a Popayán, ubicándose el camión con placas SVE-809 en una posición adelantada en la vía en relación del vehículo de placas VBU-705.

➤ **El daño.**

Se acusa como daño causado a los demandantes:

- a) Fallecimiento del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y lesiones sufridas por BELISA OCHOA MÓREO.
- b) Gastos asumidos por el funeral del FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA.

**Contradicción:** Ningún reparo formuló la parte pasiva del litigio, previo el cumplimiento de aportación oportuna y publicidad de los medios de prueba.

En respecto a este asunto, se propuso como pruebas, entre otras, copia de la necropsia del cadáver del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA (q.e.p.d.), así como copia de su registro civil de defunción, copia del informe de la policía de tránsito y transporte, acreditando de esta manera su suceso en ocurrencia del accidente de tránsito ya descrito.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

En cuanto a la señora BELISA OCHOA MORENO, se allegó copia de su historia clínica del Hospital Pablo Tobón Uribe y copia del proceso de interdicción al que fue sometida posteriormente al siniestro, acreditando con esto, las graves secuelas ocasionadas por el referido suceso.

➤ **Daño moral.**

Respecto de los daños morales, en sentencia SC 12994-2016 del 15 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la Magistrada Margarita Cabello Blanco, se señaló que:

*“7.2 El daño moral recae sobre la parte afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza y pesar<sup>3</sup>, de tal suerte que, no constituye un “regalo u obsequio gracioso” sino una compensación a la perturbación del ánimo y al sufrimiento espiritual generador de disminución e impotencia.*

*Justamente por las características que le son ínsitas, no es de fácil laborío la fijación del quantum que ha de reconocerse a la persona afectada, pero eso no es óbice para determinar, en una suma concreta, el monto de la correspondiente condena, teniendo en cuenta, en todo caso, que tal valoración debe estar guiada por los principios de reparación integral y equidad.*

*Sobre ello ha dicho la Corte que “es cierto que son de difícil medición o cuantificación, lo que significa que la reparación no puede establecerse con base en criterios rigurosos o matemáticos; pero ello no se traduce en una deficiencia de esa clase de indemnización, sino en una diferencia frente a la tasación de los perjuicios económicos cuya valoración depende de parámetros más exactos”. (CSJ SC Sentencia de 9 de diciembre de 2013, radicación n. 2002-00099).*

*Este perjuicio ha estado tradicionalmente confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no “equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas...”<sup>4</sup>. Cuando se habilita al operador a que acuda al arbitrium iudicis, naturalmente, ha dicho la Corte, aquél exige de un procedimiento que debe ser:*

*“ponderado, razonado y coherente según la singularidad, especificación, individuación y magnitud del impacto, por supuesto que las características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y el quantum*

<sup>3</sup> CSJ SC Sentencia de 20 de enero de 2009, radicación n. 000125

<sup>4</sup> CSJ SC Sentencia de 25 de noviembre de 1992, radicación n. 3382.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*debeatur se remite a la valoración del juez*”(cas. Civ. Sentencia de 18 de septiembre de 2009, radicación n. 2005-00406-01).

Es así, que la Corte ha fijado los parámetros para establecer la cuantía del daño moral, laborío que ha realizado consultando la función de nomofilaquia, hermenéutica y unificadora del ordenamiento que caracteriza a la jurisprudencia; de esa suerte, periódicamente ha señalado unas sumas orientadoras para los juzgadores, no a título de imposición sino de referentes<sup>5</sup>

Por lo anterior, la cuantía del daño moral se estima en cifras que la Corporación reajusta periódicamente, siendo entonces directrices u orientaciones para los jueces de instancia.

Es bueno destacar a este respecto, que el inciso sexto del artículo 25 del Código General del Proceso, tomó la estimación del perjuicio extrapatrimonial (moral y a la vida de relación), como criterio para establecer la competencia. Al efecto dice: *“Cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales se tendrá en cuenta, sólo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda”*.

Sobre este tema, el Consejo de Estado en decisión de fecha 23 de agosto de 2012 con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón de la Sección tercera hizo un análisis jurisprudencial respecto de la presunción de daño extrapatrimonial presumido en cabeza de los familiares así:

*“Idénticos parámetros jurisprudenciales maneja actualmente la Corte Suprema de Justicia que ha entendido que la valoración de este tipo de perjuicios corresponde al juez, quien podrá declarar su existencia con base en la prueba indiciaria, en la cual, el parentesco resulta ser un elemento que permite deducir y tener por demostrado el afecto derivado de las relaciones familiares.*

*Sobre la utilización de este medio probatorio de las presunciones para la tasación del daño moral, la Corte Constitucional ha considerado que tal criterio decantado por las Altas Cortes tiene la connotación de precedente jurisprudencial obligatorio para los jueces de menor jerarquía y, en consecuencia, ha ordenado su aplicación en los casos en los cuales se verifique que no han sido acogidos los lineamientos de tales precedentes sin que exista justificación para hacerlo. Así lo ha expresado:*

*6.4. La comentada presunción se basa en las “reglas de la experiencia” que permiten presumir “que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo*

---

<sup>5</sup> CSJ SC sentencia de 28 de febrero de 1990, G.J. No. 2439, pp. 79 ss; así en sentencia sustitutiva de 20 de enero de 2009, radicación n. 993 00215 01, reconoció por daño moral, cuarenta millones de pesos, y en decisión de 13 de mayo de 2008, reiterada en Dic. 9 de 2013, Rad. 2002-00099, noventa millones de pesos.





**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”. En este sentido se ha señalado que “es lo corriente que los padres, los hijos y los hermanos se amen entre sí, y por lo tanto, que sufran los unos con la desaparición de los otros”.*

*6.5. En este orden de ideas, el parentesco “puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la desaparición o el padecimiento de los otros”. Así, en el caso de los hermanos de la víctima, la presunción elaborada para efectos de demostrar el perjuicio moral, se funda “en un hecho probado”, cual es “la relación de parentesco”, pues a partir de ella y “con fundamento en las reglas de la experiencia, se construye una presunción que permite establecer un hecho distinto, esto es, la existencia de relaciones afectivas y el sufrimiento consecuente por el daño causado a un pariente, cuando éste no se encuentra probado por otros medios dentro del proceso”.*

*6.6. Como consecuencia de la tesis acogida, reiteradamente la Sección Tercera ha estimado que “basta, entonces, las pruebas del estado civil aportadas al proceso, para que esta sala considere demostrado, indiciariamente, el daño moral reclamado por los demandantes”, de modo que la condición de hermano de la víctima queda “debidamente acreditada” por los registros civiles que permiten establecer el parentesco y dar por probado el perjuicio moral.*

Así las cosas, en esta oportunidad, se reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino también a través del *arbitrium judicis*, conducto por el cual, mediante criterios o referentes objetivos permiten la cuantificación de las características de este concepto (daño), su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona.

Vale decir, recapitulando que debe determinarse el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, para llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese punto –*el del quantum*– obra como referente.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

**Análisis probatorio del daño moral respecto de los demandantes.** En cuanto a este punto, cada uno de los accionantes fueron interrogados, excepto la menor LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN; el día 28 de enero de 2021. En dicha diligencia se obtuvieron las manifestaciones de estas personas respecto a las afectaciones aducidas por la muerte del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y posterior convivencia y cuidado de la señora BELISA OCHOA MÓREO por cuenta de su ulterior estado físico y mental tras la colisión automotriz objeto de este proceso<sup>6</sup>.

Se endilgó, en su cercanía como familia y los cambios a los que se vieron sometidos por tal hecho, en particular con el estado de salud de la señora BELISA OCHOA MÓREO la cual, al quedar en un estado completamente dependiente, tuvo que ser cuidada hasta su fallecimiento por los demandantes (17 de diciembre de 2017), concretamente por el núcleo familiar de su hija ADRIANA BETANCUR OCHOA. Dichos cambios gravitaron en atención permanente, adaptación de su hogar y posesión en el cargo de Curadora judicial y extrajudicial de su madre en el proceso de interdicción por discapacidad mental absoluta que se tramitó ante el JUZGADO 14 DE FAMILIA DE MEDELLÍN dada la condición de salud a la que se vio sometida la señora BELISA OCHOA MÓREO en vida, precisamente a consecuencia del accidente de tránsito.

La señora ADRIANA BETANCUR OCHOA, hija del FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y BELISA OCHOA MÓREO señaló la forma en como se modificaron los espacios de su hogar para atender de manera permanente a su madre, y los roles que tuvieron que asumir para dicha tarea. En el mismo sentido, los demás demandantes expresaron sus vivencias, siendo claro que fue la señora ADRIANA BETANCUR OCHOA en la que más recayó esta labor. Tal aspecto, por ejemplo, fue reafirmado por el demandante ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA, hermano de la demandante, y persona que no habitaba en el mismo hogar donde residió la señora BELISA OCHOA MÓREO antes de su deceso.

Frente a las personas ISABELLA MEJÍA BETANCUR, GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR, MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN y LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN (nietos), se estableció las condiciones a las que se vieron abocados tras la pérdida de su abuelo y la atención de la nueva condición de su abuela; siendo palpable, que fueron ISABELLA MEJÍA BETANCUR y GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR los más afectados, al convivir con la señora BELISA OCHOA MÓREO y tener que ver perturbada su rutina cotidiana por este hecho.

Aunado a esto, se precisó los comportamientos y hábitos que la familia desempeñaba previamente al siniestro, así como la periodicidad con las cuales se reunía con los señores FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y BELISA OCHOA MÓREO. Y es que, la

<sup>6</sup> La señora BELISA OCHOA MÓREO fue diagnosticada con “trauma encefalocraneal severo (TEC), tramita ocular derecho y trauma facial” (fls 107 a 130 y 136 a 147 del Cdo. 1)

Producto de lo anterior, la señora OCHOA MÓREO obtuvo graves problemas mentales que le impiden entender y relacionarse con los demás; además perdió uno de sus ojos y quedó con dificultad de visión y perdió varios de sus dientes.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

señora BELISA OCHOA MÓREO nunca se recuperó de sus lesiones, y tuvo que aprender nuevamente a caminar entre otras funciones primarias, siempre estando limitada radicalmente, aspecto que trascendió a la condición mental, ya que nunca pudo volver a ostentar la capacidad de entablar una comunicación armónica con otra persona.

Las pruebas documentales que recalcan tan apreciación son la historia clínica de la señora BELISA OCHOA MÓREO obrante a folios 107 a 130 y 136 a 147 del Cdo. 1, que ratifican las probanzas antes mencionadas.

Por lo tanto, se evidencia un cambio en el transcurrir de la vida de los demandantes, tanto en su ámbito laboral, académico y personal, generado por la pérdida del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y posterior condición de la señora BELISA OCHOA MÓREO a partir de los hechos objeto del proceso.

**Conclusión.** Por lo tanto, en aplicación del artículo 7º del Código General del Proceso, se aplicará el pacífico precedente mencionado, que permite presumir el daño moral en cabeza de los demandantes en atención a que se cumplió con la carga probatoria correspondiente, por vía **testimonial** y **su propio dicho**, válido por virtud de lo señalado expresamente en los artículos 165 y 191 inciso final del C.G.P., como **declaración de parte**.

➤ **Nexo de causalidad.**

Este elemento consiste en la relación de causa y efecto entre el hecho calificado de dañino y el daño mismo, que para el caso en estudio se refiere a la colisión vehicular antes referida.

El **informe policial de accidentes de tránsito** señala la presencia en el lugar de los hechos, de los vehículos identificados con placas VBU-705 tipo automóvil afiliado a COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, el cuál transportaba a FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y BELISA OCHOA MORENO como pasajeros, y conducido por JARAMILLO CAMPO YINER contra el camión identificado con placas SVE-809 afiliado a COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S, documentándose además que el primero de los citados rodantes quedó destruido totalmente ubicándose posteriormente al choque sobre la línea que separaba los dos carriles de la vía, -uno para cada sentido-. **El choque sufrido se representa de la siguiente manera:**



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co



**IMAGEN No. 23:** En esta imagen se muestra la posición relativa al momento del impacto entre el vehículo No 2 y No 3, y el área de color **AMARILLO** donde se presentó la colisión, la cual se encuentra sobre el carril que conduce de Popayán a Cali, el automóvil gira en sentido de las manecillas del reloj producto del impacto con el camión.

Recreación del accidente de tránsito. Informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito NO. 120205896 (fl 579 y ss Cdo.1, Tomo II)

La condición del vehículo identificado con placas VBU-705, asignado por VELOTAX, en el cuál se transportaban los señores JARAMILLO CAMPO YINER como conductor, y los pasajeros FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y BELISA OCHOA MORENO, fue la siguiente:



**FOTOGRAFIA No 03:** En esta fotografía se observa la destrucción total del vehículo No 2, producto del impacto contra el vehículo No 1 Camión y No 3 Bus.

Fotografía tomada del Informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito NO. 120205896 (fl 579 y ss Cdo.1, Tomo II)

Tales apreciaciones además de consagrarse en el informe de la policía de tránsito y transporte apartado al proceso, también se valida con el informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito No. 120205896 aportado por la demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA. Documento que no fue objetado por ninguno de los intervinientes en el proceso.





**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bajo lo narrado por el testigo JARAMILLO CAMPO YINER quien era el conductor del vehículo VBU-705 y designado por la empresa VELOTAX para tal condición, al dirigirse a una velocidad de entre 60 a 65 Km/h en la vía que conduce de Cali a Popayán, de manera intempestiva fue sorprendido por el camión SVE-809, el cual se encontraba detenido por completo en la vía en el mismo sentido en el cual se dirigía el automóvil sin ningún tipo de señalización o iluminación, por lo que, en su intento de esquivar dicho automotor giro hacia el carril contrario, chocando en un primer instante con el camión ya mencionado en su parte trasera, para posteriormente ser embestido de manera lateral-izquierda por el Bus de placas SLF-260; vehículo que como se mencionó en acápite anteriores, no fue involucrado en este pleito.

El alusivo camión se encontraba afiliado a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S y era conducido por el señor PABLO ORBES (propietario del automotor), persona que fue demandada en el proceso, pero no compareció, siéndole designado curador *Ad-Litem* para su defensa. Aunado a esto, el representante legal de TRANSORIENTE S.A.S no asistió al proceso, y por lo tanto no le fue realizando interrogatorio de parte, dando así, aplicación a lo regulado por el numeral 4º del artículo 372 del estatuto procesal.

**Conclusión:** El conjunto de estos medios de prueba llevan a concluir que fue a causa de la colisión entre el automóvil de placas VBU-705 designado por VELOTAX, y el camión SVE-809, lo que generó la muerte del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y las graves lesiones que sufrió la señora BELISA OCHOA MORENO.

**3.4.- Atribución de la responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividad peligrosa.**

Al respecto se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en providencia del 7 de marzo de 2019, Magistrado ponente Octavio Augusto Tejeiro Duque, señaló que:

- Para que sea procedente la pretensión indemnizatoria, el accionante debe acreditar el daño, la culpa del obligado a responder y el nexo causal.
- A partir del daño causado por la negligencia contemplada en el artículo 2356 del Código Civil, se edificó la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas con culpa presunta.
- Dentro de las actividades peligrosas determinó los medios de transporte.
- Dada la presunción de culpabilidad cuando se causen daños a la víctima, en las acciones de responsabilidad extracontractual, **esta solo está obligada a probar el daño y la relación de causalidad**, elementos que como ya señalaron en numerales precedentes se encuentran acreditados en el presente asunto.
- También señaló que para que el demandado por haber ejercido una actividad peligrosa pueda exonerarse debe acreditar alguna de las causales de exoneración





**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

indicadas por la citada corporación, esto es: **i) fuerza mayor o caso fortuito, ii) culpa de la víctima, o iii) intervención de un tercero.**

*“El título XXXIV del Código Civil regula el régimen de la «responsabilidad común por los delitos y las culpas», cuyo sustento es el principio general concerniente a que todo daño ocasionado debe repararse. En ese sentido, al tenor del artículo 2341 ibídem, «[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido».*

*Para el éxito de la pretensión indemnizatoria soportada en la citada disposición, es menester que el reclamante acredite la existencia de los elementos estructurales de la responsabilidad endilgada, esto es, **el daño, la culpa del obligado a responder y el nexo de causalidad entre ellos.***

*De otra parte, el artículo 2356 del Código Civil, dispone que «por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta», norma a partir de la cual se ha edificado el régimen de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas con culpa presunta, ampliamente desarrollado por la Corte en su Jurisprudencia, a partir de la emblemática SC de 14 mar. 1938, reiterada en SC 31 may. 1938 y en CSJ SNG 17 jun. 1938.*

*Sobre estos precedentes, en SC9788-2015, memoró la Corte, ya en CSJ SNG 17 jun. 1938, GJ t. XLVI, pág. 688 al citar la anterior, dijo la Corte que «se trata en la sentencia de mayo (...) de una culpa presunta para los casos de riesgo creado, o sea cuando el daño se produce por alguno de los elementos que en la civilización acarrearán peligrosidad» y que del artículo 2356 se hace emanar «una presunción legal mixta, ya que se dice que no puede desvanecerse por cualquier medio en contrario, sino por determinados hechos» y en CSJ SNG 18 abr. 1939, GJ t. XLVIII pág. 165 dejó claro que «[e]l artículo 2347 del C.C., establece el principio de la responsabilidad por hechos ajenos y el artículo 2356 del mismo texto, sienta esta norma, bien se trate de responsabilidad directa o indirecta», donde «los ejemplos que allí se mencionan son ilustrativos y se refieren a hechos en que el daño aparece en la cosa misma, por cierta peligrosidad que en ella se transparenta», acotando que con base en ello «existe una presunción de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de daños causados por ciertas actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas».*

*Posición que se ha mantenido constante y es así como en SC 27 feb. 2009, rad. 2001-00013-01, se dijo que*

*(...) la responsabilidad civil es uno de los campos del derecho privado en el que más se ha advertido la necesaria adaptación del Derecho a las realidades de los tiempos, lo cual ha obedecido, en buena medida, a los efectos que en materia de daños han producido nuevas problemáticas sociales derivadas, particularmente, de los avances científicos y tecnológicos que, por una parte, han provocado el surgimiento, en lo que aquí interesa, de distintas actividades que califican como peligrosas o, dicho de*



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

otra forma, conllevan una mayor exposición o riesgo para los asociados, entre las cuales, aunque sólo a título ilustrativo, **pueden citarse los medios de transporte** que con la utilización de diversas formas de energía superan velocidades antes no alcanzadas, la construcción de estructuras con diversa finalidad de magnitudes cada vez mayores, la instalación de plantas nucleares, o el establecimiento de centrales eléctricas que se sirven de fuerzas naturales, como las del agua, el calor o el viento, y, por otra parte, han conducido a la revisión de los criterios tradicionales de prevención y de evitación de daños, con el propósito de determinar con la mayor precisión posible hasta dónde ha de responder el sujeto cuyo comportamiento antijurídico se examina, y a partir de qué parámetro se puede considerar que el daño ha sido el producto de una causa extraña a él.

A partir de la presunción de culpabilidad que rige en las acciones de responsabilidad extracontractual por daños ocasionados en el ejercicio de actividades peligrosas, se itera, **la víctima sólo está obligada a probar el daño y la relación de causalidad, mientras que al autor para exonerarse está obligado a acreditar la presencia de un elemento extraño como causa exclusiva del daño, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la víctima o intervención de un tercero.**

En ese sentido, en SC 26 ago. 2010, rad. 2005-00611-01, la Corte de manera enfática expuso,

La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero<sup>7</sup>. (Subraya intencional).

 (Negrilla fuera de texto).

- Se debe poner de presente que frente a los requisitos que debe acreditar el generador del daño, esto es: i) fuerza mayor o caso fortuito, ii) culpa de la víctima, o iii) intervención de un tercero, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en providencia del 7 de marzo de 2019, Magistrado ponente Octavio Augusto Tejeiro Duque, referida previamente señaló que:

*“Tradicionalmente se ha considerado que esas circunstancias eximentes de responsabilidad, son la fuerza mayor, el caso fortuito, y el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima.*

<sup>7</sup> Reiterada en SC5854-2014, entre otras.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

2.2.1. *Respecto de las dos primeras modalidades, el artículo 64 del Código Civil considera como «(...) fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.».*

*La unidad conceptual o sinonimia establecida por el legislador se explica en que «no existe realmente diferencia apreciable en términos de la función que ambas están llamadas a cumplir en el ámbito de la legislación civil vigente»<sup>8</sup>, refiriéndose ellas, en esencia, a acontecimientos anónimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales, del surgimiento de una causa extraña, no atribuible a aquel.*

*Por tanto, para poder predicar su existencia, se impone establecer que el citado a responder estuvo en imposibilidad absoluta de enfrentar el hecho dañoso, del cual él es ajeno, debido a la aparición de un obstáculo insuperable.*

*Al respecto, se han considerado como presupuestos de tales situaciones exonerativas de responsabilidad, la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecimiento, entendida aquella como la irrupción súbita de un suceso imposible de eludir, a pesar de la diligencia y cuidado observados con tal fin, para cuya evaluación en cada caso concreto, deberán tenerse en cuenta criterios como «1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo» (CSJ SC 6 ago. 2009, rad. 2001-00152-01).*

*La irresistibilidad, por su parte, atañe a la imposibilidad objetiva absoluta de evitar el suceso imprevisto y sus consecuencias, no obstante los medios empleados para contrarrestarlo o sobreponerse a él y a su desenlace, o en otros términos, cuando en las mismas condiciones del demandado y atendiendo la naturaleza del hecho, ninguna otra persona hubiera podido enfrentar sus efectos perturbadores. En tales condiciones, no sería viable deducir responsabilidad, pues nadie es obligado a lo imposible. La imposibilidad relativa, por tanto, o viabilidad de que, con algún esfuerzo, quien enfrenta la situación supere el resultado lesivo, descarta la irresistibilidad.*

*En relación con los aludidos componentes de la causa extraña, eximentes de responsabilidad, la Sala, en fallo CSJ SC 24 jun. 2009, rad. 1999-01098-01, precisó: «Justamente por la naturaleza extraordinaria del hecho imprevisto e irresistible, su calificación por el juzgador como hipótesis de vis maior, presupone una actividad exógena, extraña o ajena a la de la persona a quien se imputa el daño o a su conducta, o sea, ‘no puede concurrir con la culpa del demandado que haya tenido un rol preponderante en la causación del daño (...), pues su estructura nocional refiere a las cosas que sin dolo ni culpa inciden en el suceso (quæ sine dolo et culpa eius accidunt ) y a las que aún previstas no pueden resistirse (quæ fortuitis casibus accidunt, quum prævideri non potuerant), lo cual exige la ausencia de culpa (quæ sine culpa accidunt) y, también, como precisó la Corte, es menester la exterioridad o ajenidad del acontecimiento, en cuanto extraño o por fuera de control del círculo*

<sup>8</sup> Sentencia CSJ SC 26 nov. 1999, rad. 5220.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*del riesgo inherente a la esfera, actividad o conducta concreta del sujeto, apreciándose en cada caso particular por el juzgador de manera relacional, y no apriorística ni mecánica, según el específico marco de circunstancias y las probanzas (...).*

*Por consiguiente, la falta de diligencia o cuidado, la negligencia, desidia, imprudencia e inobservancia de los patrones o estándares objetivos de comportamiento exigibles según la situación, posición, profesión, actividad u oficio del sujeto, comporta un escollo insalvable para estructurar la fuerza mayor cuando, por supuesto, su incidencia causal sea determinante del evento dañoso, porque en esta hipótesis, el hecho obedece a la conducta de parte y no a un acontecer con las características estructurales de la vis mayor.»*

*2.2.2. La modalidad exonerativa consistente en el hecho de un tercero se estructura cuando el daño cuyo resarcimiento se pretende no puede ser jurídicamente imputable al demandado, sino a alguien diferente, carente del ligamen con él y causante directo del menoscabo.*

*Siendo ello así, para que el demandado pueda liberarse de responsabilidad deberá acreditar que el hecho del tercero fue el único factor determinante del daño y que su aparición se produjo, como en toda causa extraña, en circunstancias imprevisibles e irresistibles, inclusive, para el reclamante de la indemnización y, en definitiva, que por esa circunstancia se halla ausente el nexo de causalidad. Si el hecho del tercero puede ser prevenido o resistido por el convocado, éste deberá sufrir los efectos de la imputación que le asiste.*

*Ahora, si el hecho del tercero concurre con el del demandado en la producción del daño, la obligación resarcitoria nacerá para ambos, al generarse la solidaridad prevista en el artículo 2344 del Código Civil. En esa hipótesis, el convocado no quedará exonerado de su responsabilidad; para que ello acontezca, debe acreditarse que el actuar de aquel, fue en verdad ajeno, exclusivo, irresistible, imprevisible y determinante del menoscabo sufrido por la víctima.*

*Por lo mismo, no podrá reconocerse la eximente cuando el soportante de la acción indemnizatoria pudo prever y eludir el hecho del tercero, pues según se tiene establecido, no impedir el resultado dañoso estando en posibilidad y deber de hacerlo, equivale a producirlo.*

*2.2.3. Finalmente, cuando ha sido el hecho de la víctima el generador, de manera exclusiva y determinante del daño, será ella la llamada a soportar las consecuencias de su proceder, pues la obligación de resarcir surge del daño causado a otro, no, a sí mismo.*

*De ser aquello, el demandado también puede ser liberado de su responsabilidad o ésta resultar menguada, junto con el monto a resarcir, si coparticipó en la producción del resultado nocivo.”*

- Visto lo anterior el Despacho procederá a verificar si los demandados acreditaron alguno de los elementos de exoneración:



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**A ) Demandado COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA.**

Respecto de este demandado se parte por indicar basado en el Informe Policial para Accidentes de Tránsito, que la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito se trataba de una recta, con un cierto grado de pendiente en donde, aunque existía iluminación esta era muy deplorable, y la carretera se encontraba en condición húmeda (fl 71 y 72 Cdo.1) situación que fue ratificada por el Informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito No. 120205896 (fls 567 a 589 Cdo.1, Tomo II), aportado por esta parte, en el cual de manera contundente en sus conclusiones se señala lo siguiente:

**“5. El vehículo No.2 AUTOMÓVIL al momento del impacto se desplazaba a una velocidad inadecuada (63-83 Km/h), para las condiciones de baja visibilidad.**

**(...)**

**7. El ángulo de impacto del vehículo del vehículo No. AUTOMÓVIL indica que su conductor realizó una maniobra de giro a la izquierda, es decir, alcanzo a percibir el riesgo y realizar la maniobra a una distancia entre 26 a 46 m atrás del impacto.**

**(...)**

**8. La causa del accidente de tránsito obedece la ausencia de señalización por parte del vehículo No. 1 CAMIÓN y la velocidad inadecuada del vehículo No.2 AUTOMÓVIL coadyuvado con la disminución de la visibilidad en la vía, debido a las condiciones ambientales de lluvia con mala iluminación en horas nocturnas”.**  
(subrayado y negrilla por fuera del documento original).

Sobre la precaria luminaria de la vía, el testimonio del señor JARAMILLO CAMPO YINER -conductor del vehículo VBU-705-, y única persona que pudo constatar lo sucedido de manera presencial, aquel evoca de manera diáfana que la iluminación de la vía era pésima; razón entre otras, por la cual no pudo advertir con suficiente tiempo la presencia del camión con el cual chocó de manera frontal.

Ante lo dicho, cabe destacar que ni tanto el informe policial, ni el informe técnico aportado por la misma demandada, o mucho menos el testimonio del señor JARAMILLO CAMPO YINER fueron tachados o atacados de alguna manera.

Establece el artículo 167 del C.G.P. que incumbe a las partes probar los supuestos de hechos de las normas, así las cosas, se tiene que el vehículo VBU-705 conducido por el JARAMILLO CAMPO YINER, y afiliado a la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, en ninguna de las oportunidades procesales pertinentes aportó medios probatorios que acreditaran *i)* fuerza mayor o caso fortuito, *ii)* culpa de la víctima, o *iii)* intervención de un tercero, que lo hubieran llevado al trágico accidente fuente del presente pleito, ya que todo el material probatorio indica que el día del siniestro del vehículo se desplazaba a una velocidad inapropiada en relación con las condiciones lumínicas de la carretera, y las meras afirmaciones que favorecen sus intereses realizadas en el escrito de contestación de la demanda (fl 306-309 Cdo.1, Tomo II) y alegatos de conclusión, no tienen valor demostrativo, salvo que estén





**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

respaldadas por otros medios probatorios<sup>9</sup>, los cuales se echan de menos en el presente asunto.

Resulta pertinente indicar que el mencionado demandado plantea inexistencia de responsabilidad en su proceder, dada la estimación que toda la responsabilidad del caso recaía en el conductor del camión SVE-809, el cual se encontraba detenido por completo en la vía, en el mismo sentido en el que el automóvil se dirigía; dado que, ante las dificultades de visualización de la carretera producto de la hora del accidente como de la poca iluminación impidieron percatarse de manera previa de su ubicación y por consiguiente de evitar el trágico suceso. Ante esta apreciación, se tiene que, si el conductor encargado del vehículo VBU-705, y donde se desplazaban el señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y la señora BELISA OCHOA MORENO hubiera sido menor, o, dicho de otra manera, se hubiera ajustado a la dificultad del camino claramente hubiera podido evitar la presencia del camión ya descrito. Al tenor de lo dicho, se sostiene esta afirmación tanto por la velocidad que afirma el señor JARAMILLO CAMPO YINER que se movilizaba ese día, como el mismo informe técnico aportado por la demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA. Ahora bien, al presentarse este elemento atribuible a la conducción a la parte accionada, no cabe mérito a ninguna de sus excepciones planteadas

**Conclusión:** La demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA no acreditó ninguno de los elementos que lo exoneren en el presente asunto de la responsabilidad endilgada.

**B) Demandada EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S**

Es clara la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en la precitada providencia del 7 de marzo de 2019, en establecer que dada la presunción de culpabilidad cuando se causen daños a la víctima, en las acciones de responsabilidad extracontractual, corresponde al demandado probar las causales de exoneración de *i)* fuerza mayor o caso fortuito, *ii)* culpa de la víctima, o *iii)* intervención de un tercero.

En el caso de la citada entidad demandada, se tiene que, ni con la contestación de la demanda presentada el 29 de enero de 2018 (fls 318 a 325 Cdo.1, Tomo II) ni en las demás oportunidades procesales dispuestas para el efecto, fueron aportados medios de prueba que acreditaran *i)* fuerza mayor o caso fortuito, *ii)* culpa de la víctima, o *iii)* intervención de un tercero, y que condujeran a exonerarlo de la responsabilidad endilgada en el presente trámite. De hecho, su condición de responsable se amplifica ante la ausencia de su representante legal a la diligencia programada para el día 28 de enero de 2021 (fls 545 a 548 Cdo.1, Tomo II).

<sup>9</sup>Cfr. Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Aunado a esto, se tiene que la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, ha definido que las empresas de transporte son responsables de los vehículos que se encuentra afiliados a las mismas, **independientes si al momento de un accidente de tránsito dicho vehículo no se encuentre bajo su administración**. Sobre el particular en la más reciente jurisprudencia se ha dicho:

*“Entonces, el propósito del contrato de vinculación de un automotor a una sociedad transportista es posibilitarle la prestación del servicio público de traslado de pasajeros u objetos para el cual fue autorizada por el Estado, aval que se otorga con base en la capacidad transportadora acreditada, al tenor del artículo 22 de la ley 336 de 1996, según el cual «[t]oda empresa del servicio público de transporte contará con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los servicios otorgados.»*

*La razón de ser de la aludida consagración legal atañe al orden público, porque tiende a regular el uso de automotores en una actividad que concierne al Estado, como es el transporte público en sus diversas modalidades, sometido a reglas de intervención.*

*Efectivamente, el literal b del artículo 2o de la ley 105 de 1993 lo dispone expresamente al señalar que «(c)orresponde al estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas», todo por las implicaciones de índole económico y social que genera tal servicio público, pues a través de él son suplidas necesidades de la ciudadanía, básicas las más de las veces.*

*Además, su desarrollo tiene implicaciones para la industria de ese ramo, a nivel local, departamental y nacional, y en actividades que requieren el traslado de distintos insumos, entre otros servicios.*

*Por consecuencia, **la responsabilidad en la ejecución de tal servicio requiere de las empresas transportadoras la facultad de tener bajo su control los bienes y el personal necesario para prestar el servicio, por tratarse de requisitos exigidos por el Estado para la concesión de la autorización**.*

*De allí que sea del resorte de las sociedades transportadoras contratar directamente a los conductores de los vehículos, conforme al artículo 36 de la ley 336 de 1996, según el cual «los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo»; así como velar por el mantenimiento adecuado de los automotores (art. 38); entre otras obligaciones.*

*En pasada oportunidad y aludiendo a dichas cargas, la Corte decantó que:*



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*En el sentido que se acaba de exponer la Corporación dejó sentado, teniendo como punto de referencia las normas incorporadas en el decreto 1393 de 1970, “vigente para la época de ocurrencia de los hechos, que las empresas de transporte son, por definición, una unidad de explotación económica permanente, con los equipos, instalaciones, y órganos de administración adecuados para efectuar el acarreo de personas o bienes de un lugar a otro (art. 9o), que las mismas deben poseer un sistema adecuado de mantenimiento de los vehículos, bien que lo hagan por cuenta propia o faciliten a los demás los medios para hacerlo (art. 21); que deben forzosamente contratar los conductores y les asignan los honorarios (arts. 2º, 47 y 51); que son las que elaboran tanto el reglamento de funcionamiento como el interno de trabajo (arts. 9º y 24); las que, cuando no son propietarias de todos los vehículos, los vincula 'por cualquier forma contractual legalmente establecida' (art. 9o), y en fin, la de que una vez obtenida la licencia de funcionamiento, que la acredita encontrarse en posibilidad 'de prestar el servicio público de transporte terrestre automotor' (art.23), obtiene la tarjeta de operación de los vehículos”(G. J., t. CXCVI, pag.155). (CSJ SC de 20 jun. 2005, rad. 7627)*

*Con otras palabras, mientras un vehículo se encuentre vinculado a una sociedad transportadora a raíz de un convenio suscrito en tal sentido con su propietario, aquella no podrá exonerarse de la responsabilidad extracontractual como la auscultada en el subjudice, aduciendo haber pactado con este que la administración, control y, en general, disposición del rodante no estaría en cabeza del ente social sino del dueño del vehículo; alianza en ese sentido es contraria a su propósito, como es la entrega del bien a una empresa dedicada al ramo del transporte público, máxime si el artículo 13 de la ley 336 de 1996, aludiendo a la autorización que otorga el Estado para prestar el servicio público de transporte, prevé que «[l]a habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia, los beneficiarios de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier manera, implique que la actividad transportadora se desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le fue concedida, salvo los derechos sucesorales.»<sup>10</sup> (Subrayado y negrilla por fuera del documento original)*

Bajo estos parámetros, la defensa de la demandada de separarse de la responsabilidad que le asiste, por no ser la propietaria del camión o por haber delegado su administración en su propietario, la exime de responsabilidad en el presente asunto, dado que, al estar dicho automotor afiliado a su compañía la hace responsable solidariamente dado el deber de custodia que le asiste al prestar un servicio público.

Sobre la responsabilidad solidaria en las empresas transportadores, la Corte Suprema de Justicia en providencias como la SC5885 de 2016, ha indicado:

<sup>10</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC1084-2021 del 05 de abril de 2021. Magistrado Ponente, Dr; Roldo Wilson Quiroz Monsalvo.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*Concluyente es, las empresas transportadoras son responsables solidarias por la vinculación del automotor, como lo prevén los artículos 983, modificado por el 3º del Decreto 01 de 1990<sup>11</sup> y 991, modificado por el 9º ídem<sup>12</sup>, del Código de Comercio, en consonancia con otras disposiciones especiales, no sólo porque obtienen aprovechamiento financiero como consecuencia del servicio que prestan con los automotores afiliados, sino debido a que, por la misma autorización conferida por el Estado para operar la actividad, la cual es pública, son quienes generalmente ejercen un poder efectivo de dirección y control sobre el automotor.*

*La preceptiva anterior es coherente con el Decreto 172 de 2001 y las Leyes 105 de 1993, 769 de 2002 y el Decreto 1079 de 2015, disposiciones que hacen responsable solidarios a las empresas transportadoras, junto a propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte de servicio público, por tratarse de una actividad de interés general; además, se tornan en garantes del servicio y de la prestación legal del mismo. En ese sentido, de acuerdo al literal e) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993, por virtud de los principios rectores del transporte “La seguridad de las personas constituye una prioridad del sistema y del sector transporte”.*

*Se trata de una responsabilidad solidaria (2344 del Código Civil), directa de quien la ejecuta, del propietario, del tenedor o poseedor y de la empresa transportadora frente a la cosa, como afiliadora<sup>13</sup>. Al mismo tiempo que es una obligación de cuidado, ejercen poder de mando, dirección y control efectivo del vehículo, asumiendo deberes de diligencia.*

*El contrato de afiliación a través del cual se autoriza al propietario del automotor para prestar el servicio público de transporte en la modalidad respectiva, por tanto, convierte a la empresa en sujeto de derechos y obligaciones y le impone la carga de «(...) responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues (...)»<sup>14</sup> no hay duda que ella actúa en calidad de “(...) ‘guardián’ de la [cosa], o sea, todas aquellas de quienes pueda predicarse potestad de mando y control de la misma en cuanto detentan ‘un poder efectivo de uso, control y aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza aquella actividad’ (Casación del 13 de octubre de 1998)”<sup>15</sup>.*

*Ese criterio la jurisprudencia lo ha reiterado al señalar que “(...) las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestación regular del servicio a su*

<sup>11</sup> Las empresas son de servicio público o de servicio particular. El Gobierno fijará las características de las empresas de servicio público y reglamentará las condiciones de su creación y funcionamiento. Las empresas de servicio público someterán sus reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el servicio en vehículos de su propiedad celebrarán con los dueños de éstos el respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas reglamentarias del transporte.

<sup>12</sup> Cuando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo del dicho vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte.

<sup>13</sup> CSJ civil sentencia de 18 de junio 2013, exp. 1991.00034-01.

<sup>14</sup> CSJ Civil sentencia No. 021 1º feb. 1992.

<sup>15</sup> CSJ Civil sentencia 012 de 5 de mayo de 1999, exp. 4978.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del vehículo respectivo, ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las cuales ejecutan las actividades propias de su objeto social, no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado”<sup>16</sup>.*

Aunado a esto, tampoco se demostró que el conductor y propietario del camión de placas SVE-809, hubiera tomado las medidas necesarias para impedir el suceso, teniendo el deber objetivo de cuidado de hacerlo dada la actividad peligrosa de conducción desplegada, y por consiguiente se tiene que el accidente ocurrió por la interacción de los dos vehículos que conllevaron acarrearle perjuicios a los aquí accionantes. Sobre esto se ha expresado por nuestra máxima Corte en materia civil:

*“Las anteriores precisiones conceptuales se deben tener en cuenta tratándose de daños causados con vehículos o en accidentes de tránsito, por cuanto la conducción de automotores, en atención a su naturaleza, y en los términos de su propio régimen jurídico, contenido en la Ley 769 de 2002<sup>17</sup> (Código Nacional de Tránsito Terrestre), se define como una actividad riesgosa.”*

*(...)*

*“Así mismo, el conductor debe en su actividad comportarse en “(...) forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe[n] conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito (...)” (art. 55), y “(...) abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento (...)” (art. 61).” (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil SC2107-2018)*

Así las cosas, se tiene que, dada la pluralidad de sujetos involucrados en el presente asunto, se debe tener en cuenta la solidaridad dispuesta en materia de responsabilidad

<sup>16</sup> CSJ Civil sentencia de 20 de junio de 2005, exp. 7627.

<sup>17</sup> Modificada por las leyes 1503 de 2011, 1548 de 2012, 1696 de 2013, 1730 de 2014, 1753 de 2015, 1811 de 2016, y 1843 de 2017.





**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

civil extracontractual, donde no es separable el resultado dañino causado a los accionantes.

*Es incontrastable, conforme lo prevé el artículo 2344 del Código Civil, en materia de responsabilidad civil extracontractual, es principio general, cuando hay pluralidad de sujetos obligados, se predica la solidaridad pasiva, sin importar que el mismo resultado dañino sea atribuido a una o a varias conductas separables entre sí.*

*La última hipótesis concierne con la llamada coautoría, en cuyo caso, al decir de la Corte, el “(...) deber indemnizatorio ha de catalogarse como concurrente y, por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios responsables que a ella le son extraños y respecto de los cuales cuenta con una verdadera opción que le permite demandarlos a todos o a aquél de entre ellos que, de acuerdo con sus intereses, juzgue más conveniente (...)”<sup>18</sup>.*

*Sucede lo propio en la colisión de dos automotores terrestres, verbi gratia, uno de servicio público de transporte de personas y otro particular, hecho del cual resulta efectivamente afectado un pasajero. En palabras de la doctrina, es el “(...) ejemplo de Ticio, que transportado en un autobús, sufre un daño en su persona por culpa de su conductor y del otro vehículo que choca con el autobús (...)”<sup>19</sup>, evento en el cual, al decir de la Sala, “(...) la víctima puede optar por demandar a uno u otro conductor o propietario de los vehículos accidentados, o a ambos si así lo desea (...)”<sup>20</sup>.” (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil SC2107-2018)*

*“Es posible percibir a los individuos y algunas de sus acciones, pero el estatus de éstas como hechos jurídicos y su relación con un agente no son verificables por los órganos de los sentidos; tanto más si se trata de omisiones o de ‘causación indirecta’, pues entre la pasividad de un sujeto y el deber de evitar un resultado no existe ninguna conexión de causalidad natural. Únicamente si se reemplaza esa inactividad por la idea de un deber jurídico de actuar es posible imprimir mayor claridad y precisión a los conceptos de la comisión por omisión y la lesión por medio de otro.*

*La prueba de la imputación del hecho a un agente no se puede establecer únicamente a partir del análisis de la ‘causalidad natural pura’, porque las explicaciones físicas o mecánicas del comportamiento generador de un resultado no siempre son distinciones indiscutibles en el lenguaje jurídico, y nunca lo son en materia de omisiones y responsabilidad indirecta.” (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil SC13925-2016).*

<sup>18</sup> CSJ. Civil. Sentencia 022 de 22 de febrero de 1995 (CCXXXIV-263, primer semestre).

<sup>19</sup> DE CUPIS, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Barcelona: BOSCH, Casa Editorial S.A., 1970-300/301.

<sup>20</sup> CSJ. Civil. Sentencia 170 de 7 de septiembre de 2001, expediente 6171.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

**Conclusión:** La demandada TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S no acreditó ninguno de los elementos que lo exoneren en el presente asunto de la responsabilidad endilgada.

**C) Demandado PABLO ORBES**

Este demandado fue representado por curador *Ad-litem* Dr. CÉSAR DIMAS, quien alegó ausencia de responsabilidad civil extracontractual, ocurrencia de un tercero y fuerza mayor, pero ninguna de estas condiciones fue acreditada, no siendo exonerado de la responsabilidad que se le endilgada en el presente trámite.

De manera contraria, todo a punta a que fue por la imprudencia del señor PABLO ORBES al detener el camión de placas SVE-809, -del cual es además propietario-, en medio de un carril de una vía nacional sin ningún tipo de advertencia visual para los demás conductores de dicha carretera, así como la poca luminosidad de la zona, factores determinantes que gestaron el choque fuente de este proceso.

A esto, cabe advertir que según lo narrado por el señor JARAMILLO CAMPO YINER al momento del impacto el señor PABLO ORBES no se encontraba en el automotor, siendo, por lo tanto, posible afirmar que no impidió o tomó las medidas necesarias para que el choque se produjera o fuera evitado, de hecho, por las pruebas obrantes en el proceso son contundentes en establecer que el vehículo no portaba ningún tipo de señal que advirtiera de su condición estática en la vía.

**Conclusión:** El señor PABLO ORBES no acreditó ninguno de los elementos que lo exoneren en el presente asunto de la responsabilidad endilgada.

**D) LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO**, en su calidad de demandada principal, y como llamada en garantía de COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA concentro su defensa en aducir que no era llamada a responder en el presente caso por dos circunstancias, a saber:

- i) Con la compañía COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, se suscribieron dos pólizas de seguros, una de carácter contractual identificada con el No. AA002342, y la otra de carácter extracontractual identificada con el No. AA002341. En cuanto a la primera, esta fue afectada totalmente ante el proceso No. 2014-00391-00, que cursó ante el juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá, desembolsando las siguientes sumas:

Concepto	valor
Muerte accidental del pasajero RODRIGO ALBERTO BUSTAMANTE SÁNCHEZ.	\$32'136.000.oo
Muerte accidental del pasajero FELIZ HORACIO BETANCUR	\$32'136.000.oo



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Incapacidad permanente del pasajero BELISA OCHOA MORENO	\$32'136.000.00
<b>Total</b>	<b>\$96'136.000.00</b>

(información tomada de la certificación obrante a folio 539 a 540 Cdo.1, Tomo II)

Por este motivo, precisa que esta póliza no puede ser afectada nuevamente por este hecho.

- ii) En cuanto a la póliza No. AA002341, de carácter extracontractual, manifiesta que, esta no puede ser afectada en el presente caso, dado que la exclusión consagrada en la clausula 2.1 del contrato de seguro, advierte que esta no se hará efectiva si lo que se pretende es el cobro de la muerte o lesiones que sufran los ocupantes del automotor, dado que, para tal efecto, se dispone la póliza de responsabilidad contractual, la cual ya fue afectada. La referida exclusión reza:

*“La equidad quedara exonerada de toda responsabilidad bajo el presente amparo cuando se presente una o varias de las siguientes causales:*

**2.1 MUERTE O LESIONES A OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO**  
*(...)“ (fl 36 cdo.2)*

A criterio, de la entidad aseguradora lo pretendido en este proceso por parte de los demandantes es el reclamo de esta póliza en su condición de causahabientes (*ex iure hereditatis*), siendo, por lo tanto; improcedente su petición al estar contemplada en las exclusiones del contrato de seguro.

Ante estas aseveraciones elevadas por la demandada, es del caso precisar que, la posición de los demandantes en el presente asunto, no se trata de su derecho como causahabientes o *ex iure hereditatis*, sino de manera contraria, los accionantes actúan por derecho propio o *ex iure proprio*, dado el sufrimiento que aducen se produjo de la muerte del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y la condición de la señora BELISA OCHOA MORENO.

Bajo este parámetro, no podría florecer la defensa aducida por la demandada y por lo tanto no podría considerarse que se está ante la exclusión 2.1 del contrato de seguro suscrito entre COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA y la EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO. Sobre el particular, la doctrina ha expresado:

*“Al respecto. Se señala que los mencionados herederos actuaran ex iure proprio o por derecho propio, cuando su pretensión resarcitoria esté enderezada a reclamar los perjuicios que ellos personalmente hayan padecido con ocasión del fallecimiento de quien fue víctima directa del ilícito, mientras que procederán ex iure hereditatis en aquellas ocasiones en las que la indemnización de perjuicios que se reclama tenga*



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

relación con los daños inferidos a la persona que haya muerto sin elevar la correspondiente reclamación, caso en el cual se considera que tales herederos o sucesores reclaman para la sucesión y no para sí mismos.

(...)

A) Ejercicio de la acción “ex iure hereditatis”.

Los perjuicios que se pueden reclamar en la acción hereditaria corresponden exclusivamente a los que el causante -víctima directa del ilícito- haya sufrido con ocasión de la conducta del dañador. En materia de daños patrimoniales, se estará en presencia, por ejemplo, de la reclamación atinente a los gastos efectuados con recursos del patrimonio de la víctima para atender su curación -daño emergente- o la privación de ingresos que, en una secuencia normal u ordinaria de acontecimientos, hubiera percibido la víctima entre la fecha del ilícito y la de su fallecimiento – lucro cesante-. (...)”

B) Ejercicio de la acción “ex iure proprio”

En estos casos, allegados a la víctima -herederos o no-, a quienes su fallecimiento les genere detrimento, podrán demandar por el perjuicio que personalmente hayan sufrido con ocasión del fallecimiento de aquella. Como ya se ha indicado, tales damnificados lo son “de rebote” o por “por contragolpe”, pues reclaman por el perjuicio que personalmente han padecido, pero derivado de la afectación que de manera inmediata o primaria reciben los bienes vitales o patrimoniales de otro, con el que tiene una vinculación basada en una “situación jurídica objetiva”. Los daños que se pueden exigir en este supuesto sin tanto patrimoniales (daño emergente o lucro cesante) como extrapatrimoniales (daño moral subjetivo o daño a la vida de relación).

(...)”<sup>21</sup> (subrayado y negrilla por fuera del documento original).

Por lo anterior, los mecanismos defensivos elevados por la demandada no encuentran sustento jurídico, y, por consiguiente, es llamada a responder en la medida que fue la generadora de la póliza de responsabilidad extracontractual No. AA002341, con la cual estaba amparado el vehículo de placas VBU-705 afiliado a VELOTAX.

**Conclusión:** La demandada EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO no acreditó ninguno de los elementos que exoneraran del cobro de la póliza No. AA002341 que amparaba al vehículo de placas VBU-705 por el concepto de responsabilidad civil extracontractual. De igual manera, se determinó de manera clara que los demandantes no ejercer su condición como herederos o causahabientes (*ex iure hereditatis*), sino a título personal o *ex iure proprio*.

➤ **Cuantificación de los daños.**

<sup>21</sup> Castro de Cifuentes, Marcela. Derecho de las Obligaciones, Tomo II, Volumen I. Universidad de los Andes. Editorial Temis. 2013. Págs. 395 a 419



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Comoquiera que ninguno de los demandados desvirtuó la presunción de culpa, procederá el Despacho a avaluar los perjuicios que sufrieron los accionantes, en los siguientes términos:

**Perjuicios patrimoniales en modalidad de daño emergente.**

Como único elemento a estudiar frente a este concepto se tiene los gastos funerarios causados a raíz del fallecimiento del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA, los cuales se estimaron en la suma de \$2'000.000.00, y sustentado en los folios visibles a 103 a 104 del Cdo.1 de este proceso. A la par, de lo anterior, se encuentra ajustado el cobro de interés de la suma precedente al 6% anual, desde el momento del pago de dicha cifra, hasta el momento de la presentación de la demanda, por un valor de \$617.400.00, dando como resultado un total por daño emergente de \$2'617.400.00.

**Perjuicios inmateriales daño moral.**

Ahora bien, al analizar este perjuicio a la luz de los preceptos jurisprudencial que rigen la materia, y las probanzas obrantes en el expediente, esta petitoria será concedida a la totalidad de los demandantes, dado el fallecimiento del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA y las graves lesiones que sufrió la señora BELISA OCHOA MORENO en los años posteriores al accidente de tránsito, consistente en su cuidado diario y permanente dadas sus afectaciones en sus capacidades motoras e intelectuales a las que se vio expuesta, esto sin perder de vista que dada su incapacidad para cuidar de sí misma, tuvo que ser trasladada de manera permanente hasta su fallecimiento el 17 de diciembre de 2017.

Conforme lo expuesto y atendiendo que la valoración de los perjuicios morales queda al prudente criterio del juez<sup>22</sup>, este Despacho acogerá la indicación de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación de fijarlo acorde con lo indicado con fallos precedentes, donde para el efecto tomara en cuenta la tabla dispuesta por el Consejo de Estado en providencia del 22 de junio de 2017, Consejero ponente, Jaime Enrique Rodríguez Navas, en la cual se indicó:

*“En sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, se unificó la posición respecto del reconocimiento del perjuicio moral en los casos de lesiones a la víctima, en donde se estableció que la gravedad de la lesión causada a la víctima directa es la que determinará el monto de la indemnización en salarios mínimos, y respecto de las víctimas indirectas se les asignó un porcentaje de conformidad con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado.*

<sup>22</sup> Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, providencia SC13925-2016



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Gravedad de la lesión	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno - filiales	Relación afectiva del 2º grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º grado de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º grado de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
	<b>S.M.L.V.G.</b>	<b>S.M.L.V.G.</b>	<b>S.M.L.V.G.</b>	<b>S.M.L.V.G.</b>	<b>S.M.L.V.G.</b>
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

Así las cosas y comoquiera que se encuentra demostrado el parentesco sanguíneo y civil entre las personas afectadas directamente en el siniestro descrito, esto es, de los señores FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA (q.e.p.d) y BELISA OCHOA MORENO (q.e.p.d), con los demandantes ADRIANA BETANCOURT OCHOA (hija), ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA (hijo), ISABELLA MEJÍA BETANCUR (nieta), GABRIEL FELIPE

**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

MEJÍA BETANCUR (nieto), MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN (nieta), GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA (nieto) y GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA (yerno), y que sus peticiones se ajustan a los topes consagrados en dicha providencia, serán por lo tanto avalados dichas pretensiones, fijando por lo tanto dicho ítem de la siguiente manera:

Así las cosas, respecto a la muerte del señor FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA la indemnización correspondiente, por daño moral será:

Persona	Parentesco	valor
ADRIANA BETANCOURT OCHOA	Hija	100 SMMLV (\$90'.852.600.oo)
ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA	Hijo	100 SMMLV (\$90'.852.600.oo)
ISABELLA MEJÍA BETANCUR	Nieta	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR	Nieto	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA	yerno	25 SMMLV (\$22'713.150.oo)

En cuanto, al daño moral en relación con el cuidado de la señora BELISA OCHOA MORENO posteriormente al accidente de tránsito, se determinar de la siguiente manera:

Persona	Parentesco	valor
ADRIANA BETANCOURT OCHOA	Hija	75 SMMLV (\$68'139.450.oo)
ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA	Hijo	75 SMMLV (\$68'139.450.oo)
ISABELLA MEJÍA BETANCUR	Nieta	40 SMMLV (\$36'341.040.oo)
GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR	Nieto	40 SMMLV (\$36'341.040.oo)
MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	40 SMMLV (\$36'341.040.oo)
LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	40 SMMLV (\$36'341.040.oo)
GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA	yerno	15 SMMLV (\$13'627.890.oo)

**Llamamiento en Garantía y demandada principal.**

En el presente asunto se tiene que fue llamada en garantía la EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO por COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, sociedad afiliadora del vehículo de placas VBU-705



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Frente a la resistencia formulada por la citada aseguradora, a la cual tiene derecho<sup>23</sup>, se pone de presente que:

- Correspondía acreditarse respecto del vehículo asegurado que ante la actividad peligrosa ejercida con este y la presunción de culpabilidad cuando se causan daños a la víctima, en las acciones de responsabilidad extracontractual, alguna de las causales de exoneración de *i)* fuerza mayor o caso fortuito, *ii)* culpa de la víctima, o *iii)* intervención de un tercero.
- No se probó ninguna de las causales de exoneración citadas, tal y como se indicó a lo largo de esta providencia.
- Con la contestación de la demanda y llamamientos de Garantía (fls 357 a 377 Cdo.1, Tomo II, y fls 53 a 74 Cdo.2), y en las demás oportunidades procesales, EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO., tampoco acreditó ninguna de las citadas causales de exoneración.
- No resulta de recibo la excepción alegada de eximente de responsabilidad de hecho de un tercero respecto del vehículo identificado con placas VBU-705, en tanto, que como ya se indicó debía acreditar alguna de las causales de exoneración, y los reparos de la defensa de COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, amén que esta estuvo huérfana de pruebas que demostraran que el acontecimiento materia de este proceso fuera causado únicamente por el camión de placas el camión SVE-809. De hecho, el informe técnico aportado por la misma VELOTAX es conducente en afirmar que lo acontecido también se debió a la velocidad impropia del conductor del vehículo afiliado a esta compañía, en contravía del deber objetivo de cuidado de hacerlo dada la actividad peligrosa de conducción desplegada, y por consiguiente se tiene que el accidente ocurrió por la interacción del automotor que se encuentra amparado con el contrato de seguro suscrito con VELOTAX.
- La totalidad de los demandantes acuden al presente pleito acuden a título personal o *ex iure proprio*, y no como herederos o causahabientes (*ex iure hereditatis*).

---

<sup>23</sup>Sentencia SC5885-2016 “Resulta necesario señalar en cuanto tiene que ver con el presente asunto, que aun cuando puede coadyuvar en la defensa a la parte que lo llama porque en el evento de que prosperen las pretensiones del actor por causa de la relación de garantía sustancial puede ser condenado, pues se encuentra en relación de dependencia frente a las pretensiones principales; también puede, en el ámbito de su derecho de defensa, debatir la existencia, eficacia, extinción o vigencia de la relación sustancial que justifica su llamamiento para la pretensión del reembolso que le formula el llamante, por derecho o interés propio, y por tanto, ostenta las facultades que el ordenamiento le ofrece para oponerse a la pretensión de garantía que se la ha formulado, so pena, de responder de acuerdo a su condición sustancial de garante.”



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia

Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

De lo expuesto, tanto en la demanda principal, como en el llamamiento en garantía, se evidencia que la vinculación a la aseguradora no deviene de ninguna manera de haber participado del hecho objeto del litigio, sino de su papel contractual como asegurador.

En gracia de discusión, el demandante podía demandar directamente por cuenta de acumulación de pretensiones al amparo del artículo 88 del C.G.P. o proceder con el llamamiento en garantía, prerrogativa contenida en el canon 64 de la misma disposición, de suerte que los medios defensivos propuestos al respecto se despachan desfavorablemente.

Visto lo anterior y teniendo en cuenta la cobertura de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. AA002341, adquirida por COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, se ordenará a EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO, a reembolsarte a los demandantes las siguientes sumas al haber sido demandada directa<sup>24</sup>:

- Por amparo patrimonial \$2'617.400.00,
- Amparo de perjuicios morales \$64'272.000,00.

Y que no se diga que la mencionada póliza no cubre el daño moral, pues la literalidad de la misma reza lo contrario (fl 349 Cdo.1, Tomo II), tal como se evoca a continuación:

**“Incluye lucro cesante y daño moral sin que al momento sin que al momento de la indemnización supere el valor asegurado estipulado en la caratula de la póliza y según sentencia judicial”.** (subrayado y negrilla por fuera del documento original).

En consecuencia, el Juzgado Diecisiete (17) Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

**RESUELVE:**

<sup>24</sup> Sobre el particular, se pone de presente lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en providencia SC5885-2016, en la que indicó:

*“También lo ha previsto la jurisprudencia de esta Corte al precisar que «(...) eso es lo que impera la lógica y la técnica de la sentencia, el reembolso o el pago se debe disponer por parte del tercero (llamado), al llamante, denomínese demandante o demandado, que hubo de resultar condenado, pero nunca **per saltum** a quien no fue el citante, porque se trata de relaciones jurídicas perfectamente diferenciables: la del demandante con el demandado y la del llamante con el tercero. Necesítase, dice la Corte, “que el llamante sea condenado como consecuencia de la demanda que se dirigió contra él; y que el llamado esté obligado por ley a resarcirlo de este mismo riesgo, o que, previamente haya contratado tal resarcimiento” (Sent. de 28 de septiembre de 1977). Desde luego que la técnica de la decisión no puede ser distinta, porque necesariamente el llamamiento en garantía, que implica la proposición de una novedosa pretensión del llamante frente al llamado, conduce a la aparición de un proceso acumulativo, justificado, como ya se dijo, en la economía procesal, que es la que a la postre determina la anticipación de la pretensión de regreso».*

**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

**PRIMERO: DECLARAR** civil y solidariamente responsables de la actividad peligrosa a la **COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S,** y **PABLO ORBES,** y en calidad de aseguradora a **EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO,** respecto de los perjuicios ocasionados a **ADRIANA BETANCUR OCHOA, ÓSCAR DAVID BETANCUR OCHOA, ISABELLA MEJÍA BETANCUR, GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR, MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN, LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN** y **GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA.**

**SEGUNDO: CONDENAR** solidariamente a **COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S, PABLO ORBES,** y a **EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO,** a pagar a en el término de 10 días contados a partir de la ejecutoria de la decisión, las siguientes sumas de dinero:

- a) Por daño emergente la suma de dos millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos pesos (\$2'617.400.oo) a favor de OSCAR DAVID BETANCUOURT OCHOA.
- b) Por daño moral las siguientes sumas de dinero determinadas así:
- Por la muerte de FÉLIX HORACIO BETANCUR MESA.

Persona	Parentesco	valor
ADRIANA BETANCOURT OCHOA	Hija	100 SMMLV (\$90'.852.600.oo)
ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA	Hijo	100 SMMLV (\$90'.852.600.oo)
ISABELLA MEJÍA BETANCUR	Nieta	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR	Nieto	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	50 SMMLV (\$45'426.300.oo)
GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA	yerno	25 SMMLV (\$22'713.150.oo)
<b>Total</b>		<b>\$386'123.550.oo</b>

- Por las secuelas físicas y mentales de BELISA OCHOA MORENO

Persona	Parentesco	valor
ADRIANA BETANCOURT OCHOA	Hija	75 SMMLV (\$68'139.450.oo)
ÓSCAR DAVID BETANCOURT OCHOA	Hijo	75 SMMLV (\$68'139.450.oo)
ISABELLA MEJÍA BETANCUR	Nieta	40 SMMLV (\$36'341.040.oo)



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**  
Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

GABRIEL FELIPE MEJÍA BETANCUR	Nieto	40 SMMLV (\$36'341.040.00)
MARÍA ALEJANDRA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	40 SMMLV (\$36'341.040.00)
LAURA ANDREA BETANCUR SANJUÁN	Nieta	40 SMMLV (\$36'341.040.00)
GABRIEL JAIME MEJÍA PIEDRAHITA	yerno	15 SMMLV (\$13'627.890.00)
<b>Total</b>		<b>\$295'270.950.00</b>


Respecto de **EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO**, deberá tenerse en cuenta el descuento previo del deducible pactado en la póliza de seguro y sin exceder el monto límite pactado en dicho contrato.

**TERCERO:** Negar las defensas formuladas por los demandados.

**CUARTO:** CONDENAR en costas a los demandados COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA, COMBUSTIBLES Y ENCOMIENDAS TRANSORIENTE S.A.S, PABLO ORBES y a EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO.

**QUINTO:** FIJAR como agencias en derecho las suma de \$ 20'520.357.00.

**NOTIFÍQUESE,**



**CESAR AUGUSTO BRAUSÍN ARÉVALO**  
**JUEZ**

RQ

Decisión 1 de 1

**JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO  
DE BOGOTÁ D.C.  
NOTIFICACIÓN POR ESTADO**  
La anterior providencia se notifica por ESTADO No. 031  
Hoy 30 de septiembre de 2021  
El Secretario



**CAMILO ANDRÉS BAQUERO AGUILAR**